**PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.**

**EXPEDIENTE:** TEEA-PES-037/2022.

**DENUNCIANTE:** Anayeli Muñoz Moreno.

**DENUNCIADO:** Imagen S.A. de C.V., Gráfica Espectaculares S.A. de C.V. y Ricardo Fernández Vargas Hernández.

**MAGISTRADA PONENTE:** Claudia Eloisa Díaz de León González.

**SECRETARIO DE ESTUDIO:** Néstor Enrique Rivera López.

Aguascalientes, Aguascalientes, a primero de junio de dos mil veintidós[[1]](#footnote-1).

**Sentencia** por la que se determina la **inexistencia** de la infracción objeto del presente Procedimiento Especial Sancionador, atribuible a los proveedores de servicios Imagen S.A. de C.V.; Gráfica Espectaculares S.A. de C.V.; y, Ricardo Fernández Vargas Hernández, lo anterior, con motivo de la presunta **Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género**[[2]](#footnote-2) y censura y destrucción de propaganda electoral, cometida en contra de la denunciante.

1. **ANTECEDENTES.**
2. **Proceso Electoral Local 2021-2022.** El día siete de octubre del dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria del Consejo General del IEE se realizó la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022 en el Estado de Aguascalientes, para la elección de la Gubernatura del Estado,
3. **Presentación de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.** El siete de abril, Anayeli Muñoz Moreno, presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escrito de demanda en contra de tres proveedores de servicios de publicidad, por considerar que cometieron censura, destrucción de propaganda y VPMG, en su contra.
4. **Reencauzamiento a Procedimiento Especial Sancionador.** El día veinte de abril, la Sala Superior, emitió acuerdo dentro del expediente SUP-JDC- 426/2022, mediante el cual reencauzo el juicio ciudadano a Procedimiento Especial Sancionador, remitiéndolo al Instituto Estatal Electoral para su sustanciación.
5. **Radicación de la denuncia en el IEE.** El veintinueve de abril, el Secretario Ejecutivo del IEE radicó la denuncia en cuestión, asignándole el número de expediente IEE/PES/032/2022.
6. **Oficialía Electoral.** El siete de mayo, el Secretario Ejecutivo recibió copia certificada de la Oficialía Electoral IEE/OE/062/2022 en la que se asentaron los hechos constatados motivos de este procedimiento.
7. **Admisión de la denuncia y emplazamiento.** El diez de mayo, el Secretario Ejecutivo, dictó el acuerdo de admisión, señalando fecha para la celebración de la Audiencia de Pruebas y Alegatos.
8. **Audiencia de pruebas y alegatos.**  El veintiuno de mayo, en las instalaciones del IEE, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos a que se refieren los artículos 272 del Código Electoral, así como 101 y 102 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IEE.

Concluida la audiencia, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del IEE, ordenó realizar el informe circunstanciado para turnar el expediente al Tribunal Electoral.

1. **Turno del expediente.** El veintidós de mayo, mediante Acuerdo de Turno de Presidencia, se ordenó el registro del asunto en el Libro de Gobierno de Procedimientos Especiales Sancionadores, al que correspondió el número de expediente TEEA-PES-037/2022 y se turnó a la Ponencia de la Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González.
2. **Formulación del proyecto de resolución**. El treinta y uno de mayo, se radicó el expediente en la ponencia de la Magistrada Electoral precisada, y una vezverificada su debida integración, al no existir trámite alguno o diligencia pendiente por realizar, se ordenó formular el proyecto de resolución y ponerlo a consideración del Pleno, según lo previsto en la fracción IV, artículo 274 del Código Electoral.
3. **COMPETENCIA.** Este Tribunal es competente para resolver el Procedimiento Especial Sancionador en términos de lo que disponen los artículos 252, fracción II, 268, fracción IV, 274 y 275 del Código Electoral, ya que se relaciona con la difusión de una nota periodística que podría constituir VPMG en contra de la denunciante, y que de comprobarse, pudiera impactar en su esfera de derechos, y en su participación en el PEL 2021-2022.

Lo anterior, además encuentra sustento en la **Jurisprudencia 25/2015,** de rubro: **COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES,** así como en la **Jurisprudencia 48/2016**, de rubro: **VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES.**

1. **PERSONERÍA.** La C. Anayeli Muñoz Moreno, tiene reconocida su personalidad en su calidad de Mujer y de actual Candidata a la Gubernatura, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano.

Por parte de la persona moral *IMAGEN DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.*, parte denunciada, se acredita la personería de Catalina Castro Ontiveros, en su carácter de Representante Legal, por así hacerlo constar ante la autoridad instructora.

Por parte de la persona moral *GRÁFICA ESPECTACULARES S.A. DE C.V.*, parte denunciada, se acredita la personería de Gregorio Pérez Díaz, en su carácter de Representante Legal, por así hacerlo constar ante la autoridad instructora.

El C. Ricardo Fernando Vargas Hernández, en su calidad de denunciado, acreditó su personalidad ante la autoridad instructora.

1. **HECHOS DENUNCIADOS Y DEFENSAS.** Esta autoridad jurisdiccional considera oportuno sintetizar los argumentos expuestos tanto en el escrito de queja presentado por parte de la denunciante, como los vertidos en los escritos de defensa de las partes denunciadas. Esto, para seguir con la fijación de los puntos materia del procedimiento a dirimir en la presente sentencia.
   * + 1. **DENUNCIA.** La denunciante, se duele de acciones que a su consideración son actos de censura y VPMG, denunciando a las empresas IMAGEN DE AGUASCALIENTES S.A. de C.V.; GRÁFICA ESPECTACULARES S.A. DE C.V.; y RICARDO FERNANDO VARGAS HERNÁNDEZ.

Medularmente se agravia, porque a su consideración, los denunciados realizaron actos de censura y destrucción de propaganda impresa (lonas espectaculares) provocando VPMG.

Señala que las dos personas morales, empresas, se negaron a fijar propaganda electoral de su campaña, lo que, a su consideración, afecta sus derechos político electorales.

En el escrito de denuncia, se refiere que, durante la etapa de precampaña, su coordinador y el área de administración de su campaña, “contrataron veinte espectaculares con diversos proveedores”, precisando en su denuncia que contrató con las partes denunciadas lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Gráfica Espectaculares S.A. de C.V.** | **7 espectaculares** |
| **Imagen de Aguascalientes S.A. de C.V.** | **3 espectaculares** |
| **Ricardo Fernando Vargas Hernández** | **5 espectaculares** |
| **Otros proveedores** | **5 espectaculares** |
|  | **Total 20 espectaculares** |

Continúa señalando en su denuncia, que el día tres de abril, que iniciada las campañas se subieron ocho espectaculares, estando en proceso de avisos de contratación. En la denuncia, se asienta también que, al día siguiente, cinco espectaculares estaban siendo retirados.

En su denuncia, señala que el anuncio con número de registro INE-RNP-000000430905, fue retirado de su colocación.

Señala la denunciante, el día cuatro de abril, que “el gerente general” remitió oficio en donde le informa del retiro de la propaganda.

La denunciante, se duele de la falta de fundamento o justificación de la actuación de la empresa, lo que a su juicio constituye una determinación voluntaria de censurar su propaganda electoral.

Señala también que el oficio donde informa el retiro de la propaganda, tiene elementos que constituyen VPMG, porque a su consideración al referir que “ha trabajado con CANDIDATOS” hace una distinción de género, lo que causa un perjuicio a la denunciante.

1. **DEFENSAS.**

**2.1. DEFENSA DE “GRÁFICA ESPECTACULARES S.A. DE C.V.”:** La empresa denunciada, comparece por conducto de Gregorio Pérez Díaz, representante legal, quien medularmente señala en su defensa que la empresa que representa, no formalizó contrato mercantil con la denunciante. Señala que la accionante, en ninguna manera refiere circunstancias de modo, tiempo y lugar, en cuanto a la celebración de un contrato.

Señala también que no existió acto de discriminación o violentador basado en el género de la candidata, insistiendo en que no existen obligaciones ni relación alguna entre su representada y la candidata denunciante.

**2.2. DEFENSA DE “IMAGEN DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.”:** La empresa denunciada, comparece por conducto de Catalina Castro Ontiveros, quien manifiesta en su defensa que no tiene ni tuvo ninguna relación comercial ni de servicio con al denunciante.

**2.3. DEFENSA DE RICARDO FERNANDO VARGAS HERNÁNDEZ.** El denunciado, señala que no existe contrato alguno con la denunciante, respecto a los espectaculares señalados.

Refiere que nunca ha existido una relación contractual en donde fungiera como proveedor de los espacios publicitarios. Precisando, que la candidata fue omisa en dar cumplimiento íntegro al requerimiento realizado por el IEE.

Señala que no ha cometido actos de censura que pusieran en condiciones desiguales a la candidata.

Refiere en su defensa, que las acciones que reclama no fueron cuestión de discriminación en razón de género, pues considera que la denunciante basa sus acusaciones en meras suposiciones y apreciaciones.

El denunciado, manifiesta que utilizó el término “Candidatos” de manera genérica, como una forma de expresión gramatical común, al utilizar el término en masculino, sin hacer alusión al género de la candidata.

Señala que, ante la inexistencia de contrato alguno, en su calidad de propietario, puede disponer de los espacios que le pertenecen y que no han sido asignados mediante un instrumento legal.

1. **ALEGATOS.** A fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su integridad la denuncia planteada, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento, asiste a las partes el derecho de formular alegatos, y debe estimarse que este órgano jurisdiccional debe analizarlos al resolver el Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa; resulta aplicable la jurisprudencia 29/2012 de rubro: **“ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”.[[3]](#footnote-3)**

En la audiencia de pruebas y alegatos, la actora, compareció por escrito exponiendo que ratifica en su totalidad el escrito inicial de denuncia.

Por cuanto hace a los denunciados, vertieron sus alegatos, tal como ya han sido precisados en el apartado de **Defensas.**

1. **MEDIOS DE CONVICCIÓN.** Antes de analizar la legalidad, o no, de los hechos denunciados, es necesario verificar su existencia y las circunstancias de su realización, por tanto, es pertinente, a partir de los medios de prueba que constan en el expediente, precisar que únicamente se valorarán las pruebas relacionadas con los hechos que forman parte de la controversia en el presente procedimiento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRUEBA | OFERENTE | CONSISTENTE EN | VALORACIÓN |
| Documental Privada | DENUNCIANTE | Imágenes impresas de estructuras de propaganda de tipo espectaculares, con las que se pretende demostrar la supuesta ubicación de los anuncios objeto de denuncia, a saber, señala los siguientes domicilios:  1. Blvd. Luis Donaldo Colosio #246, Fracc. Trojes del Campestre, donde presuntamente se visualiza el espectacular identificado bajo INE-RNP-000000430898.  2. Av. Siglo XXI, número 1943, Pozo Bravo donde presuntamente se visualiza el espectacular identificado bajo INE-RNP-000000430898.  3. Av. Aguascalientes Norte, Fraccionamiento Bosques del Prado, donde presuntamente se visualiza se visualiza el espectacular identificado bajo INE-RNP-000000430899 | En relación con el artículo 256, tercer párrafo del Código Electoral; Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. |
| Documental Privada | DENUNCIANTE | Escrito mediante el que pretende dar cumplimiento al requerimiento de la autoridad señalando los domicilios exactos de la ubicación de los espectaculares que son objeto de denuncia, refiriendo los siguientes:   1. Av. Convención de 1914 Ple. 904, Gómez, 20060, Aguascalientes, Ags. 2. Av. de la Convención Norte Esq. 20 de noviembre 313, Gremial Aguascalientes, Aguascalientes 3. Carretera Panamericana Sur Km SN, Plan del Azadón Aguascalientes, Aguascalientes 4. Av. Convención Poniente 904, Fracc. Gómez Aguascalientes, Aguascalientes 5. Blvd. José María Chávez S/No, Lindavista Aguascalientes, Aguascalientes 6. Av. Héroe de Nacozari Sur S/No, Jardines de la Asunción Aguascalientes, Aguascalientes. 7. Blvd. Siglo XXI Sur S/No, Solidaridad I Aguascalientes, Aguascalientes 8. GÓMEZ MORIN ESQ. CARLOS M. LÓPEZ 9. Blvd. Luis Donaldo Colosio #246, Fracc. Trojes del Campestre 10. Norte Sierra del Laurel 212, Bosques del Prado Nte. 11. AV. SIGLO XXI 1014, Rodolfo Landeros; 12. Av. Siglo XXI #1943, Pozo Bravo; 13. AV de los Maestros #2504 C.P. 20285. | En relación con el artículo 256, tercer párrafo del Código Electoral; Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. |
| Documental Privada | DENUNCIANTE | Escrito mediante el que pretende dar cumplimiento al requerimiento de la autoridad en donde le solicitaron exhibir los contratos, presentando únicamente imágenes impresas de presuntas notas de venta o recibos. | En relación con el artículo 256, tercer párrafo del Código Electoral; Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. |
| DOCUMENTAL PÚBLICA | DENUNCIANTE | Acta de oficialía electoral IEE/OE/062/2022. En la que se certificó la existencia de los lugares señalados por la denunciante. | En relación con el artículo 256, segundo párrafo del Código Electoral; las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. |
| DOCUMENTAL PRIVADA | DENUNCIANTE Y DENUNCIADO RICARDO FERNANDO VARGAS HERNÁNDEZ | Documental consistente *"...el acuse del oficio emitido por mí en fecha 4 de abril de 2022 dirigido al Coordinador de Campaña de Movimiento Ciudadano...".* | En relación con el artículo 256, tercer párrafo del Código Electoral; Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí |
| PRESUNCIONAL e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES | TODAS LAS PARTES | Todo lo que por su contenido y alcance favorezca a sus intereses | Probanza que adquirirá plena eficacia probatoria, en términos del artículo 310 del Código Electoral, si se adminiculan con los elementos que obren en el expediente, así como las manifestaciones que las partes realizaron en el escrito de denuncia y contestación, se advierta que son coincidentes y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. |

No pasa desapercibido que la denunciante, en su escrito inicial ofrece una documental privada consistente en copia simple de un Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en el que se que se adoptaron medidas cautelares respecto de un procedimiento sancionador diverso en contra de la denunciante, relativo a presunta difusión de propaganda calumniosa en radio y televisión, y que se advierte, no guarda relación con los hechos que ahora se analizan.

1. **HECHOS ACREDITADOS.** Haciendo una valoración en conjunto de los medios de prueba referidos, analizados por este Tribunal bajo las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, con fundamento en el artículo 310 del Código Electoral, al describirse el total de las pruebas que obran en el expediente, y al haberse valorado de manera individual y conjunta, de conformidad con lo establecido por el Código Electoral, corresponde identificar los hechos que fueron acreditados.
   1. **Calidad de la denunciante.** La denunciante acude en su calidad de candidata a la Gubernatura postulada por el partido MC.
   2. **Calidad de los denunciados.** La persona moral *IMAGEN DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.*, parte denunciada, se acredita la personería de Catalina Castro Ontiveros, en su carácter de Representante Legal, por así hacerlo constar ante la autoridad instructora.

La persona moral *GRÁFICA ESPECTACULARES S.A. DE C.V.*, parte denunciada, se acredita la personería de Gregorio Pérez Díaz, en su carácter de Representante Legal, por así hacerlo constar ante la autoridad instructora.

El C. Ricardo Fernando Vargas Hernández, en su calidad de denunciado, acreditó su personalidad ante la autoridad instructora.

* 1. **Calidad de los denunciados en el Registro Nacional de Proveedores[[4]](#footnote-4).** De conformidad con la diligencia para mejor proveer realizada por esta autoridad, se tiene que los tres prestadores de servicios, denunciados, tienen registro activo en el RNP.

1. **Estudio de Fondo.**  El aspecto a dilucidar en la presente sentencia es en primer lugar, determinar la existencia de los hechos denunciados, y posteriormente, de ser el caso, establecer la responsabilidad atribuible a cada uno de los sujetos señalados como infractores de las disposiciones normativas.

Finalmente, de ser procedente, se fijará la sanción correspondiente según la responsabilidad que resulte.

**a. METODOLOGÍA.** En un primer apartado, se asentarán los marcos normativos correspondientes a VPMG, así como las reglas generales de la propaganda electoral.

Posteriormente se analizarán si los hechos denunciados son existentes y si transgreden la norma en cuanto a propaganda electoral, ocasionado una censura en perjuicio de la denunciante y, si de los hechos, se desprenden elementos constitutivos de VPMG.

Posteriormente, en caso de determinar la existencia de las infracciones denunciadas, se individualizará la responsabilidad y sanción correspondiente.

Al respecto, se debe tener en cuenta que, para resolver el presente asunto, este Pleno se ceñirá a las directrices contenidas en la Tesis IV.2o.A.38 K (10a.), de rubro: **PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE EXISTA ALGUNA PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, DEBE REALIZARSE BAJO ESA VISIÓN, QUE IMPLICA CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI EL ENFOQUE JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO.**

**b. MARCO NORMATIVO DE VPMG.**

**Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.** La violencia contra las mujeres es una de las afectaciones a derechos humanos y libertades fundamentales más extendidas y sistemáticas en el mundo, que les impide el reconocimiento, titularidad y goce de sus prerrogativas, a partir del esquema de desigualdad, discriminación y opresión que impera en muchas sociedades.

Esta problemática requiere que se prevengan, erradiquen, investiguen y sancionen comportamientos y prácticas socioculturales que se basan en conceptos de dominación, subordinación e inferioridad para hacer menos a las mujeres en cualquiera de las esferas en las que se desenvuelven.

De ahí que la vida libre de violencia no se considere como simple retórica, sino como un derecho humano, que busca garantizar que a las mujeres no se les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, a partir de acciones y omisiones que se basen en el sexo, el género o cualquiera otra característica personal o grupal[[5]](#footnote-5).

En ese sentido, es fundamental la protección y el respeto de su vida, integridad, seguridad, honor, dignidad y el derecho a ser educada libre de patrones estereotipados[[6]](#footnote-6).

**Violencia política en México.** En atención a la desigualdad de género y la violencia que viven las mujeres para tener una vida activa en el ámbito político en México, como medida de atención prioritaria, en abril del 2020 entró en vigor el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones legales en materia de VPMG.

Por primera vez se definió dicha violencia como toda “*acción u omisión, incluida la tolerancia,****basada en elementos de género****y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo*”[[7]](#footnote-7).

Aunque cabe destacar que el listado de conductas constitutivas de VPMG es enunciativo y no limitativo, es posible analizar conductas que puedan dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres en el ejercicio de cargos públicos, políticos, de poder o de decisión, en los que se afecten sus derechos políticos electorales.

La Sala Superior se estableció los elementos necesarios para identificar cuándo se está en presencia de alguna conducta que pudiera ser VPMG[[8]](#footnote-8):

* Se presenta en el ejercicio de los derechos políticos o electorales o de un cargo público.
* Se puede realizar por el Estado, sus agentes, superioridades jerárquicas, pares, partidos políticos o sus personas representantes, medios de comunicación, una persona particular o un grupo de gente.
* Es una violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica.
* El objeto o resultado es menoscabar el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los referidos derechos de las mujeres.
* Se basa en elementos de género (por ser mujer; impacto diferenciado; y, afecta desproporcionadamente).

Asimismo, se estableció que, en materia electoral, las quejas o denuncias por VPMG se pueden sustanciar a través del procedimiento especial sancionador, dentro y fuera del proceso comicial, por ser una herramienta de naturaleza pronta y eficaz.

**¿Cómo tenemos que juzgar cuando se denuncia VPMG por vía del procedimiento especial sancionador?** La Sala Superior[[9]](#footnote-9) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)[[10]](#footnote-10) han establecido, en atención a las obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos y de una vida libre de violencia que, cuando se denuncien agresiones contra las mujeres en el ámbito político, **los casos deben analizarse con perspectiva de género.**

Esta visión, nos permite interpretar los textos no literalmente, sino de manera crítica y minuciosa para identificar los focos rojos (categorías sospechosas)[[11]](#footnote-11).

Como autoridades jurisdiccionales debemos detectar las posibles relaciones asimétricas de poder entre los géneros, que pueden producir discriminación; cuestionar los hechos y valorar las pruebas sin prejuicios o estereotipos de género para advertir las desventajas; evaluar el impacto diferenciado para dictar una resolución justa acorde al contexto de desigualdad por el género; aplicar estándares de derechos humanos y usar lenguaje incluyente[[12]](#footnote-12).

Entonces, los casos de VPMG ameritan un deber reforzado para actuar con debida diligencia, estudiando de forma integral todos los hechos y elementos, explorando todas las líneas de investigación, para determinar qué ocurrió y cómo impactó a la denunciante.

Cabe precisar que como personas juzgadoras debemos abandonar el formalismo mágico[[13]](#footnote-13) y poner más atención de los contextos de las mujeres que denuncian.

Estos casos, requieren que las juezas y jueces nos pongamos los lentes violetas[[14]](#footnote-14), para identificar estereotipos de género y visibilizar patrones de conducta discriminatorios y violentos.

Por lo anterior, los órganos jurisdiccionales tenemos la responsabilidad de actuar con mayor diligencia y dar enfoques interseccionales, que permitan visibilizar que lo que puede ser aparentemente neutral, en realidad es discriminatorio, porque las violencias se encuentran normalizadas, veladas y comunes que se aceptan sin cuestionar[[15]](#footnote-15).

**c. Propaganda Político Electoral.** La propaganda es la difusión deliberada y sistemática de un mensaje -en forma simplificada y condensada- entre el público, con la intención de influir en sus percepciones y valores y de ese modo dirigir sus acciones hacia un objetivo determinado.

Para hablar de propaganda, resulta indispensable que un mensaje, imagen, eslogan, entre otros, se difunda o se haga extensivo de manera estratégica y constante o reiterada.

La Sala Superior, ha determinado que, propaganda en sentido amplio, se concibe como una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una escala amplia para influir la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar los efectos calculados.

Su propósito, es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos.

La propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más que objetivos, porque trata de estimular la acción, esto es, la propaganda tiene el propósito de influir en el ánimo de las personas para adoptar determinada conducta.

En esa lógica, la propaganda electoral busca guiar a los receptores a un comportamiento a favor del actor político que la emite durante los procesos electorales, mediante la persuasión, para realizar una acción pasiva o activa, con el objetivo de incidir en los resultados electorales.

El artículo 242, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define a la propaganda electoral como los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Además, el artículo 243 del mismo ordenamiento, en cuanto a propaganda político-electoral, prevé gastos derivados de **contratación** de servicios relativos a propaganda.

Por su parte el artículo 157, del Código Electoral establece que la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones, candidaturas comunes y los candidatos registrados para la obtención del voto.

A su vez, la fracción segunda del tal artículo, define **propaganda electoral** como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Aunado a lo anterior, el Código Local en su artículo 139, al igual que la LGIPE, contemplan la celebración de contratos por motivo de propaganda impresa.

Por su parte la jurisprudencia 37/2010 de esta Sala Superior de rubro **“PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA”**, establece que la propaganda electoral se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político.

Entonces, podemos decir que la propaganda electoral es la publicidad que preparan las candidaturas y los partidos políticos para dar a conocer a la ciudadanía quiénes son los candidatos que compiten por los diversos cargos de elección popular. También, para difundir los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, a través de la reiteración de mensajes, textos, imágenes, proyecciones, expresiones, en los que transmiten sus propuestas de campaña e ideología, para acercarse a su público meta, el electorado y, con ello, obtener el triunfo en la jornada electoral, y que, en algunos casos, es objeto de contratos para la publicidad de la misma.

**d. CASO CONCRETO.**

**¿Qué denuncia la candidata Anayeli Muñoz Moreno?**

Del escrito de denuncia, tenemos que la candidata expone haber contratado con diversos proveedores de servicios de publicidad impresa, la fijación o colocación de 20 anuncios espectaculares.

Presenta la queja en contra de tres proveedores de servicios, a saber:

|  |
| --- |
| **Gráfica Espectaculares S.A. de C.V.** |
| **Imagen de Aguascalientes S.A. de C.V.** |
| **Ricardo Fernando Vargas Hernández** |

Señala que quince de los espectaculares contratados, fueron retirados, y algunos no fueron colocados por los denunciados.

Sin embargo, la denunciante en su escrito inicial se limita únicamente a señalar tres (03) domicilios o ubicaciones en donde presuntamente se debieron colocar los espectaculares denunciados.

Mencionando los siguientes domicilios:

1. Blvd. Luis Donaldo Colosio #246, Fracc. Trojes del Campestre, donde presuntamente se visualiza el espectacular identificado bajo INE-RNP-000000430898.

2. Av. Siglo XXI, número 1943, Pozo Bravo donde presuntamente se visualiza el espectacular identificado bajo INE-RNP-000000430898.

3. Av. Aguascalientes Norte, Fraccionamiento Bosques del Prado, donde presuntamente se visualiza se visualiza el espectacular identificado bajo INE-RNP-000000430899

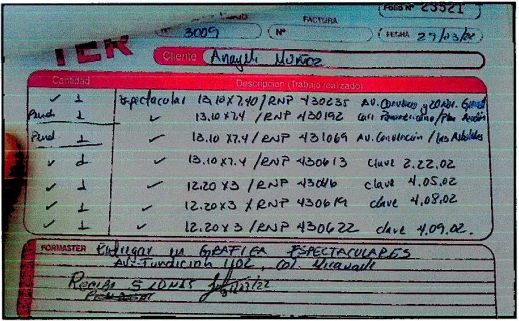
Ante las inconsistencias en el escrito origen de la querella, la autoridad instructora requirió a la accionante para que precisara las ubicaciones o localizaciones de los espectaculares (quince) que señala como objeto de la denuncia, además del instrumento legal, contrato, que acreditara la celebración de un acuerdo que obligue a los prestadores del servicio.

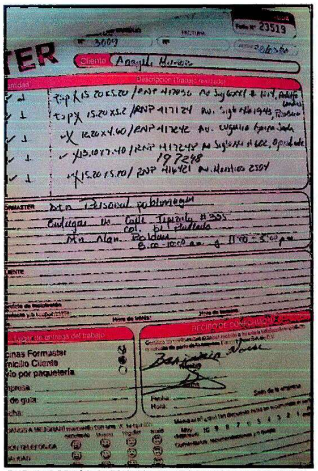
En esa lógica, la denunciante, mediante escrito presentado el día dos de mayo, señaló la ubicación de trece lugares en donde presuntamente se colocaron o debieron colocar los espectaculares, cabe precisar que originalmente refirió que fueron quince los anuncios denunciados.

1. Av. Convención de 1914 Ple. 90%, Gómez, 20060, Aguascalientes, Ags.
2. Av. de la Convención Norte Esq. 20 de noviembre 313, Gremial Aguascalientes, Aguascalientes
3. Carretera Panamericana Sur Km SN, Plan del Azadón Aguascalientes, Aguascalientes
4. Av. Convención Poniente 904, Fracc. Gómez Aguascalientes, Aguascalientes
5. Blvd. José María Chávez S/No, Lindavista Aguascalientes, Aguascalientes
6. Av. Héroe de Nacozari Sur S/No, Jardines de la Asunción Aguascalientes, Aguascalientes.
7. Blvd. Siglo XXI Sur S/No, Solidaridad I Aguascalientes, Aguascalientes
8. GÓMEZ MORIN ESQ. CARLOS M. LÓPEZ
9. Blvd. Luis Donaldo Colosio #246, Fracc. Trojes del Campestre
10. Norte Sierra del Laurel 212, Bosques del Prado Nte.
11. AV. SIGLO XXI 1014, Rodolfo Landeros;
12. Av. Siglo XXI #1943, Pozo Bravo;
13. AV de los Maestros #2504 C.P. 20285.

Además, presentó imágenes impresas[[16]](#footnote-16), que refiere son notas o recibos de pago, alegando que las empresas se negaron a realizar un contrato por la prestación del servicio de renta de espacios publicitarios y colocación de propaganda impresa, espectaculares.

Se insertan las imágenes de referencia:





Además, se duele de un documento, privado, que remitió uno de los proveedores para informar el retiro de algunos espectaculares, sin precisar cuáles o cuántos, pues de una forma engañosa, adjunta la imagen de tres lugares, sin referir mayores datos, en donde inculpa a dos de los tres proveedores.

De esta manera, la candidata pretende denunciar que las empresas y/o proveedores señalados, afectan sus derechos por una presunta censura y se queja de VPMG porque, en el contenido del oficio referido en el párrafo anterior, el remitente señala entre otras cosas, que en procesos pasados ha sido proveedor de diversos candidatos, lo que interpreta la denunciante, como un acto discriminatorio en su contra.

**¿Cuál es la respuesta de los denunciados?**

De los escritos por medio de los cuales comparecen los denunciados, si bien cada uno lo hace en su propio derecho o por medio de su representante, pero lo hacen de manera individual, lo cierto es que los tres son consistentes en **no haber celebrado contrato alguno con la candidata.**

Refieren incluso, que la candidata al denunciar y ser requerida por la autoridad, fue omisa en exhibir instrumentos legales válidos en donde se obligue a prestar algún servicio en favor de la denunciante por parte de los proveedores.

El C. Ricardo Vargas Hernández, en su comparecencia además de señalar que no ha celebrado ningún contrato vigente con la denunciante, también ofrece como prueba el mismo escrito señalado por la candidata, argumentando que en ninguna manera se hicieron aseveraciones de tipo violento o discriminador en contra de la candidata.

Explica que utilizó el vocablo CANDIDATOS, de una forma genérica, argumentando que gramaticalmente, utilizar palabras en masculino, engloba tanto a hombres como a mujeres, además señala que, en la misma prueba, hace hincapié en que se encuentra en la mejor disposición para celebrar contratos con todas y/o cualquiera de las candidatas en la presente contienda.

**¿Qué evidencia obra en autos?**

Este Tribunal tras analizar los medios de prueba ofertados por todas las partes, precisa que la denunciante para validar su queja, presenta imágenes impresas, tanto de estructuras publicitarias como de supuestas notas o recibos de pago, las cuales por su naturaleza son indiciarias y estas deben adminicularse con otras que doten de certeza lo denunciado.

Además, refiere ubicaciones o domicilios donde supuestamente se localizan las estructuras objeto de esta denuncia, sin embargo, en diversas ocasiones lo hace de manera imprecisa, en primer lugar, en el escrito inicial, solamente señala tres domicilios, de los quince supuestos anuncios espectaculares, para posteriormente, mediante otro escrito, señalar trece ubicaciones, omitiendo por lo menos dos más que, en suma, localizaran todos los referidos por la propia denunciante.

Aunado a lo anterior, la oficialía electoral, al certificar los lugares **señalados por la denunciante**, da cuenta de situarse en los lugares de referencia y hacer constar lo existente en la ubicación.

Del acta de oficialía, al analizar su contenido, se observa que ninguno de los lugares contenía publicidad o propaganda electoral en favor de la candidata denunciante, incluso, en algunos de los sitios no existía estructura para el tipo de propaganda impresa que se denuncia.

Al respecto, la denunciante en sus alegatos, manifiesta que la autoridad instructora dejó de hace *acciones y diligencias necesarias para la investigación de los hechos,* pues en cuanto a la localización de los espacios publicitarios, considera que debió prevenirse con ubicaciones geográficas a efecto de localizar los espectaculares referidos por la candidata.

Sin embargo, al indagar en los autos, no es posible advertir documento, referencia o prueba alguna en donde la candidata precisara y relacionara cada uno de los supuestos espectaculares con los domicilios que aportó (solamente trece, de quince supuestos espectaculares).

**Valoración y Decisión.**

Del análisis y valoración del caudal probatorio, este Tribunal advierte la **inexistencia de las infracciones denunciadas,** por las siguientes consideraciones.

**En cuanto a la censura que denuncia la candidata.**

En primer lugar, cabe precisar que, en la legislación mexicana, puntualmente el artículo 5° Constitucional, garantiza la libertad contractual, es decir, *“nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento”*.

Además, la SCJN[[17]](#footnote-17), ha establecido el aforismo jurídico: **la voluntad de las partes es ley suprema de los contratos.**

En ese sentido, tanto la declaración de la denunciante al señalar que: “los proveedores se negaron a firmar los contratos” y las manifestaciones que de manera consistente expusieron los tres denunciados al referir que **no existe contrato alguno con la candidata,**  resulta evidente para este Tribunal que no obra instrumento legal que obligue a los proveedores a prestar un servicio en favor de la candidata, ni existe documento o evidencia que inculpe a los proveedores respecto de alguna infracción en materia electoral.

Si bien, la contratación en procesos electorales sigue determinadas reglas, entre ellas, celebrar contratos con proveedores debidamente registrados en el RNP del INE, lo cierto es que esta regla en ninguna manera se interpreta como una obligación para el proveedor de brindar algún servicio si no existe contrato que medie entre su actividad y la prestación requerida por el cliente, o en este caso, la candidata.

Así, ante la falta de contrato o acuerdo de voluntades entre las partes, este Tribunal advierte que no existe obligación exigible a los proveedores de servicio en cuanto a la denuncia interpuesta por la candidata.

Aunado a lo anterior, al analizar cada uno de los elementos que obran en autos, es claro que la denunciante generó una serie de inconsistencias en su denuncia al grado de omitir referenciar cuales espectaculares se vinculaban con los domicilios, a efecto de brindar circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Por el contrario, tales inconsistencias evitan saber con certeza, si los espectaculares existieron o no, pues las pruebas aportadas por la denunciante, por los denunciados, así como las obtenidas por la autoridad administrativa, resultan insuficientes para acreditar la existencia de la infracción.

Pues, como lo ha señalado la Sala Superior[[18]](#footnote-18), corresponde al oferente de pruebas técnicas y documentales privadas, indicar lo que se pretende acreditar mediante la identificación de lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo, además de realizar una descripción detallada de los elementos de la misma.

Sin embargo, como ya se ha señalado, la denunciante omitió referir, e incluso, posterior a su escrito de denuncia, mediante un oficio y escrito de alegatos, trató de subsanar la falta de precisión de su queja, incluso pretendiendo que la autoridad instructora certificara más allá de lo señalado por la candidata accionante.

Así, este Tribunal advierte que la denunciante, fue omisa en detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hiciera posible la ubicación y referir cuales son los espectaculares que dejaron de colocarse o fueron retirados.

De esta manera, los elementos probatorios que ofreció como técnicas y fueron admitidos como documentales privadas (que, de conformidad con el Código Electoral tienen el mismo valor probatorio) son insuficientes para demostrar la existencia de los hechos[[19]](#footnote-19). Es así, porque en el expediente, no existen otros elementos de prueba que lo corroboren, y con los cuales puedan adminicularse debidamente y, con ello obtener un alcance demostrativo mayor que el indiciario.

Ahora bien, en cuanto al oficio mediante el cual se informó el retiro de espectaculares, si bien fue ofrecido por ambas partes, con lo que se acredita la existencia de dicho oficio, éste resulta insuficiente, pues del análisis del mismo, no se desprenden datos que permitan identificar a qué anuncio, o anuncios, o estructuras, o propaganda impresa se refiere con certeza, pues ni la candidata ni el proveedor señalan cuál es el anuncio retirado.

De esta manera, este Tribunal se encuentra imposibilitado para deducir a cuál anuncio hacen referencia, pues como ya se insistió previamente, la denunciante fue omisa en señalar circunstancias de modo tiempo y lugar, incluso, es visible en el expediente una impresión simple de imágenes, que la denunciante pretende anexar al oficio referido, acompañadas de domicilios y refiriendo (en dos imágenes) a una empresa distinta a la que representa el C. Ricardo Vargas Hernández, por lo que resulta imposible determinar cuál es el espectacular supuestamente retirado.

En virtud de lo anterior, se declara la **inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados.**

**En cuanto a VPMG denunciada por la candidata.**

Ahora bien, en cuanto a la VPMG, este Tribunal determina que es **inexistente** la falta denunciada, por las siguientes razones:

La candidata refiere que el proveedor de servicios Ricardo Vargas Hernández, remitió oficio mediante el cual, informó el retiro de propaganda electoral.

En el oficio, el signante manifiesta que “*durante mas de 28 años de historia en nuestro querido Aguascalientes y diversos estados(sic) de la República, Publimagen ha tenido la oportunidad de trabajar con gobiernos y candidatos de todos los partidos políticos, ofreciéndoles nuestros servicios publicitarios sin distingo de ideologías”*

En ese sentido, la candidata denuncia que la expresión “Candidatos” tiene un elemento de género y discriminación en su contra, generando un estereotipo, un limitación y menoscabo a sus capacidades como candidata mujer. Por tales razones considera que el proveedor, violenta en razón de género a su persona.

En ese sentido, la Sala Superior ha fijado criterio y elementos necesarios para actualizar VPMG, en la jurisprudencia **21/2018**, de rubro: **VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.**

Así, ha establecido que, para acreditar la infracción, deben concurrir todos y cada uno de los siguientes elementos:

*1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público;*

*2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;*

*3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;*

*4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y*

*5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres.*

Bajo ese entendimiento, el denunciado en su defensa manifiesta que las expresiones no contienen un elemento de género, por el contrario, son expresiones genéricas, que si bien, refirió la palabra “CANDIDATO” lo hizo de manera amplia, sin dirigirlo exclusivamente a hombres, alegando que en el lenguaje español es válido expresarlo de esa manera.

Al respecto, si bien la obligación de toda autoridad es juzgar con perspectiva de género, e ir concientizando e introduciendo un lenguaje inclusivo, lo cierto es que La Real Academia Española considera que el "lenguaje inclusivo" es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el **uso genérico del masculino gramatical**, "mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna".

En ese sentido, si bien, en un afán de sensibilizar a la ciudadanía en general, las autoridades electorales y personas públicas nos encontramos en un desarrollo del lenguaje a efecto de concientizar el lenguaje inclusivo, lo que en ninguna manera presupone, que el uso común de la lengua constituya, por si mismo, un ataque o violencia por razón de género, sino que cada caso, debe ser valorado en su contexto, a fin de determinar el sentido de las palabras.

En el caso, de la lectura del documento del que se duele la candidata, se advierte que la sintaxis del mismo tiene una connotación incluyente y abierta al diálogo, y que de ninguna manera encasilla a la candidata en un estereotipo o le supone un menoscabo a sus derechos por una cuestión de género.

Incluso, al leer el documento, es notorio que quien lo redactó, hace énfasis en ser una “*empresa a favor de la democracia y la pluralidad política”;* continúa señalando que les “*entusiasma que nuestro Estado vaya tener su* ***primera mujer gobernadora,*** *por lo que nos hemos dispuesto a apoyar en la medida de nuestras posibilidades que se conozcan las propuestas de las* ***5 candidatas”.*** Cerrando su escrito, con un posicionamiento en cuanto a la disposición de colaborar en futuros servicios publicitarios.

De esta manera, se advierte que, de conformidad con los requisitos establecidos por la Sala Superior en la jurisprudencia 12/2018, **no existen elementos que actualicen VPMG, ni tampoco se advierte que se infrinja disposición alguna contenida en la Ley General para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.**

Por lo anterior, este Tribunal, advierte que son **inexistentes las faltas atribuidas a las empresas Gráfica Espectaculares S.A. de C.V.; Imagen de Aguascalientes S.A. de C.V.; así como al proveedor de servicios publicitarios Ricardo Fernando Vargas Hernández.**

**RESOLUTIVOS.**

**Único.** Se declaran **inexistentes** las infracciones denunciadas.

**Notifíquese.** Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, por **unanimidad** de votos de la Magistrada y Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAGISTRADA PRESIDENTA**  **CLAUDIA ELOISA DÍAZ DE LEÓN GONZÁLEZ** | |
| **MAGISTRADA**  **LAURA HORTENSIA**  **LLAMAS HERNÁNDEZ** | **MAGISTRADO**  **HÉCTOR SALVADOR**  **HERNÁNDEZ GALLEGOS** |
| **SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS**  **JESÚS OCIEL BAENA SAUCEDO** | |

1. Todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. [↑](#footnote-ref-1)
2. En lo sucesivo, VPMG [↑](#footnote-ref-2)
3. Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 129 y 130. [↑](#footnote-ref-3)
4. Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo RNP. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.gob.mx/segob/articulos/a-que-se-refiere-el-derecho-a-una-vida-libre-de-violencia> [↑](#footnote-ref-5)
6. Lo afirmó la CEDAW en su Recomendación General 19. Véase Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género, páginas 22 a la 29. [↑](#footnote-ref-6)
7. Artículo 3, primer párrafo, inciso k), de la LEGIPE y 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) [↑](#footnote-ref-7)
8. Jurisprudencias 21/2018 de rubro: “*VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO*” y 48/2016 de rubro “*VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES*”. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 442, párrafo 2, y 442 Bis de la LEGIPE. [↑](#footnote-ref-9)
10. SUP-JDC-383/2016 y el SUP-JDC-18/2017. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tesis 1a. XXVII/2017 (10a.) de rubro “*JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN.*” y tesis 1ª. CLX/2015 (10a.) de rubro “*DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN*”. [↑](#footnote-ref-11)
12. Véase Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. SCJN. Pág. 56. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tesis de la Primera Sala 1a./J. 22/2016 (10a.) de rubro “*ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO*”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ponerse *lentes* o *gafas violetas*, es una metáfora para hacer referencia a que podemos mirar el mundo de otra manera, en otras palabras, a través de las relaciones de género. Esto permite detectar las muchas discriminaciones que enfrentan las mujeres día con día. <https://www.centroeleia.edu.mx/blog/la-importancia-de-ponernos-las-gafas-violetas-al-estudiar-y-ejercer-la-psicologia/> [↑](#footnote-ref-14)
15. Véase Protocolo para la Atención de la Violencia contra las Mujeres en razón de género, página 41. [↑](#footnote-ref-15)
16. Imágenes que fueron admitidas como documental privado. [↑](#footnote-ref-16)
17. AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6806/2018 [↑](#footnote-ref-17)
18. SUP-JRC-137/2018 [↑](#footnote-ref-18)
19. Jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. [↑](#footnote-ref-19)